

SOCIEDAD

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Tras el aval ambiental a centenares de instalaciones solares y eólicas, España se prepara para un auge sin precedentes que ya crea tensiones

La gran explosión renovable: más de 1.400 proyectos en camino

M. PLANELLES / I. FARIZA
D. GRASSO, Madrid

Todos los expertos consultados para este reportaje coinciden: no hay precedentes de una explosión de energía renovable como la que se espera en los dos próximos años en España. ¿La razón? El visto bueno ambiental de las autonomías y el Gobierno a más de 1.400 proyectos de eólica y, sobre todo, solar. Esta nueva oleada se une a lo ya instalado en los dos últimos años, que también han sido de récord para la fotovoltaica, la tecnología que está viviendo el momento más dulce. Esta rápida y masiva expansión está ayudando a España a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, y a obtener una electricidad más barata. Pero, a la vez, está causando tensiones derivadas de la competencia por el suelo, los impactos paisajísticos o la biodiversidad, lo que está acrecentando un cierto movimiento de rechazo en algunas zonas rurales.

A la lucha climática se une la obligación que se ha fijado la UE de alejarse del gas y el petróleo de Rusia tras la invasión de Ucrania. Bruselas ha marcado el camino de forma cristalina: más renovables aún más rápido y eficiencia energética. Y en eso está la UE: en 2022, la eólica y la solar generaron una quinta parte de la electricidad de Europa (22%), superando por primera vez al gas (20%) y al carbón (16%), según los análisis de Ember. España fue, tras Alemania, el país de la UE que más solar produjo —aumentó un 21% respecto a 2021—. En el caso del viento, con un ritmo de expansión ahora más modesto, también fue la segunda nación que más electricidad voló en la red.

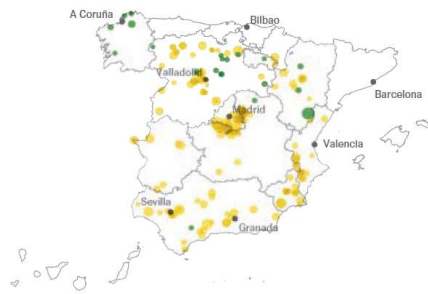
Todo eso es ya el pasado. EL PAÍS intenta adentrarse ahora en el futuro inmediato, en lo que se vivirá los dos próximos años en España, uno de los países del mundo más atractivos para invertir en renovables. Para ese viaje en el tiempo la mejor ruta es analizar las evaluaciones ambientales de los proyectos ya aprobados, una información que en muchas ocasiones hay que extraer con sacacorchos de los boletines oficiales. El aval ambiental es imprescindible para que un proyecto salga adelante.

Cuando los proyectos superan los 50 megavatios (MW) de potencia —lo que comúnmente se conoce como macroparque—, es la Administración central la encargada de conceder o no los permisos. En estos momentos, hay 25 de estas grandes instalaciones en funcionamiento: 18 fotovoltaicas y siete eólicas. Pero, desde enero de 2022 y hasta el viernes, el *Boletín Oficial del Estado* ha publicado las declaraciones de impacto ambiental favorables de otros 182 macro-

Macroproyectos eólicos y solares

Proyectos con aval ambiental

● Eólicos ● Solares Potencia (en MW) ○ 50 ○ 200 ○ 500



Proyectos con evaluación ambiental aprobada por los gobiernos regionales
Aragón aparece sin datos porque su Ejecutivo ha rechazado facilitarlos

MW aprobados

Menos de 80 Más de 10.000



Fuente: Registro de Instalaciones de producción de energía eléctrica. EL PAÍS

proyectos (161 solares y 21 eólicos). Si todos salen adelante, supondrá multiplicar por siete los macroparques.

En el caso de los proyectos de menos de 50 MW, de cuya tramitación se encargan las autonomías, hasta el 25 de enero —la fecha límite para desatascar la tramitación de centenares de ellos fijada por el Estado— los gobiernos regionales habían dado el aval ambiental a otros 1.236 parques más, según los datos facilitados por 16 de las 17 autonomías (todas salvo Aragón, la única que no ha querido ofrecer esta información). En total, sumando los permisos de todas las administraciones, se trata de 1.418 instalaciones con una potencia conjunta de 68.856 MW. Es más de lo que hay instalado en España de fotovoltaica y eólica juntas ahora, que ronda los 50.000 MW. La mayoría de esos nuevos proyectos debería estar funcionando en junio de 2025, según el calendario del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las energías limpias generaron en 2022 la quinta parte de la electricidad en la UE

El Gobierno ha dado el visto bueno a 182 grandes plantas (más de 50 megavatios)

“Hay que ver cuánto de eso acaba construyéndose, pero la realidad es que nunca ha habido tantos proyectos grandes en marcha. España ya es un país líder en renovables y todas estas declaraciones de impacto ambiental aprobadas van a consolidar aún más su posición”, apunta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de BeBartlet.

Medidas compensatorias

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, recuerda que la mayoría de los proyectos que han recibido la declaración de impacto ambiental favorable “deben modificarse y aplicar medidas compensatorias para ejecutarse”. Tras ese aval, los promotores deben lograr la autorización inicial, la de construcción y, por último, la de funcionamiento. “No sabemos cuántos asumirán estas exigencias y seguirán adelante”, añade Aagesen, quien insiste en que lo que “se materialice será excelente con el medioambiente y con el territorio”. De momento, según los datos recabados por EL PAÍS, 21 de los 182 macroparques en cartera del Gobierno central ya han logrado la autorización inicial o la de construcción.

Pero, en algunos casos, las condiciones impuestas en el proceso ambiental —como reducción de potencia y superficie o compensaciones— o la financiación —la subida de tipos ha complicado mucho las cosas— pueden truncar las cuentas y dejar el proyecto en la cuneta. “Aquellos en los que antes los números salían justitos, ahora pueden no salir”, admite el jefe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEf), José Donoso. La consejera extremeña para la Transición Ecológica, Olga García, considera que ese no será el caso de los 140 proyectos (3.657 MW) a los que esa autonomía ha concedido el permiso medioambiental. “Prácticamente todo eso va a salir adelante por el trabajo previo que hemos hecho con los promotores”, sostiene García, que no oculta que las renovables son una de las prioridades que se ha fijado su Gobierno. “No solo son beneficiosos en la lucha contra el cambio climático, sino también en la generación de empleo y de riqueza”, argumenta. En Extremadura, García defiende que la implantación de la solar está siendo bastante pacífica. Pero en otros territorios no está sucediendo lo mismo.

“Se está empezando a crear una coalición del no a la que se unen algunos partidos: es un riesgo a la misma altura del negociacionismo climático directo”, advierte Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana destituido por Compromís tras imponerse en ese partido la corriente que



aboga por poner freno al desarrollo de los grandes parques. “Si estos movimientos tienen tanta tracción es precisamente porque no estamos sabiendo explicar por qué esto es tan importante para todos. No para las empresas, sino para toda la sociedad”, desliza.

El antropólogo y profesor de la Universidad de Búfalo (Nueva York) Jaime Franquesa conoce bien los movimientos de oposición a las renovables. De eso trata su último libro —*Molinos y gigantes* (Errata Naturae)—, en el que analiza este fenómeno en Cataluña, una de las comunidades más retrasadas en el despliegue de energías limpias. En su opinión, el caldo de cultivo del creciente rechazo a estas tecnologías es una “sensación de agravio” en las áreas rurales: “Lo que hay en la llamada España vaciada es una sensación de abandono que precede a las renovables; hay una sensación de que siempre les tiene que tocar a ellos”, dice. “Uno de los fracasos de la España democrática es que la distancia entre el campo y la ciudad se ha acrecentado”.

Buena parte de la oposición se ha aglutinado alrededor de la plataforma Aliente, en la que confluyen multitud de movimientos de distinta índole. Una de las organizaciones que forman parte de esa plataforma es la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Su presidente, Gerardo Bágüena, critica lo que entiende como un cambio de postura del Gobierno: “Hemos pasado de empoderar al territorio rural, que estaba abandonado, a apoyar una

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

SOCIEDAD



Macroplanta fotovoltaica de la Mula, en Murcia, el viernes. / ALFONSO DURÁN

transformación del paisaje y del entorno sin precedentes en solo dos años; no ha dado tiempo a asimilarlo". En su opinión, los parques "son incompatibles con algunas actividades", como el turismo. "Lo que la gente busca cuando viene es la belleza y la singularidad del paisaje". Báguena habla de una "competición por el suelo" en las zonas rurales: "Los promotores pagan entre cuatro y cinco veces más de lo que se saca ahora por una hectárea, y contra eso no se puede competir".

Solo los 182 macroproyectos con el aval ambiental del Gobierno se extenderían por una superficie vallada de 53.000 hectáreas, el 0,1% del territorio español. Y lo que los promotores buscan mayoritariamente son suelos de secano: "La fotovoltaica se va a los suelos con cultivos de cereal o remolacha, que tienen menos productividad", explica el consejero de Sostenibilidad de La Rioja, Alejandro Dorado Nájera.

"¿Por qué no pueden ir a zonas degradadas ya o a las zonas mineras?", se queja Báguena. Franquesa apunta a que el "despliegue renovable está funcionando con las leyes del mercado". Dos son los factores que buscan las promotoras: "El lugar en el que hay más sol o viento y en el que menos se pague por el suelo", lo que conduce hasta las tierras de secano, los municipios sin segundas residencias y las zonas con menos densidad de población. Dentro del movimiento de rechazo, también hay críticas hacia el papel que juegan las grandes empresas y fondos de inver-

sión, que son los que tienen más músculo financiero para sacar adelante los grandes parques. Por ejemplo, de los 182 macroproyectos con aval estatal, Iberdrola, Enel y TotalEnergies acaparan más autorizaciones.

"En La Rioja nos preocupa la aceptación de los proyectos", reconoce Dorado. "Pero intentamos explicar que los gobiernos no decidimos dónde se ponen las renovables, sino dónde no se pueden poner". En esta comunidad se ha vetado el desarrollo de proyectos en dos tercios del territorio. "Y en el tercio restante, los proyectos pasan un filtro y un control porque no vamos a luchar contra la crisis climática agravando la crisis de biodiversidad", asegura el consejero.

Juan Carlos del Olmo, responsable de WWF, no tiene dudas: "Necesitamos sí o sí las energías verdes. España está en la zona cero del cambio climático, este verano lo volveremos a ver con más fuerza, y solo tenemos una línea de avance: las renovables". Y añade: "Si apostamos por cerrar el carbón y por el cierre progresivo de la nuclear, no queda otra". Pero ese despliegue, que "debe ser muy rápido", se produce en medio de una situación un tanto caótica generada por la falta de "un ordenamiento territorial real en España".

Las competencias urbanísticas están transferidas a las comunidades y esto ha dificultado que se haya aprobado una zonificación vinculante por parte del ministerio, como pedían las ONG ecologistas, explica Asunción

Los detractores opinan que los parques afectan al turismo rural

"¿Por qué no van a zonas degradadas?", pide el presidente de una asociación

kioskoymas#rjlo

Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. El ministerio elaboró en su día un mapa en el que se señalaban las zonas sensibles que no deberían ser aptas para la implantación de renovables. Pero no era de obligado cumplimiento. Y alrededor del 20% de los proyectos de renovables en los que SEO/BirdLife ha presentado alegaciones no cumplían con esa zonificación e incluía actuaciones en áreas sensibles. "Las empresas tienen que entender que si presentan planes ahí vamos a alegar y los procesos se alargarán", apunta Ruiz, quien recuerda que su organización lleva implicada en la tramitación de los proyectos renovables desde los noventa, cuando se instalaron los primeros parques eólicos en Cádiz.

Del Olmo, de WWF, aprecia una falta de transparencia que impide tener claro el mapa del desarrollo de las renovables. Pero, con la información que se va extrayendo con cuentagotas, se vislumbran ya las comunidades que pisan el acelerador y las que pisan el freno, lo que acrecienta el agravio entre regiones. "No puede haber regiones de primera y de segunda", se queja el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero Palomo. "No puede ser que Madrid ponga la industria y nosotros la electricidad. Aragón le ocurre lo mismo con Cataluña; se necesita una solución estatal". Una posible vía de compensación podría ser la fiscalidad, defiende por su parte la consejera extremeña. "Se debe compensar a las comunidades que están priorizando el

despliegue renovable", pide García. En cualquier caso, ambos consejeros, del PSOE, no tienen dudas del camino que han emprendido de apoyo a la solar.

Pese a las quejas y temores, las ONG ecologistas más conocidas no se alinean con los postulados que abogan por frenar las renovables y las moratorias. Pero sí vislumbran un futuro próximo de judicialización, algo a lo que contribuirá la aprobación a finales de 2022 de un real decreto con el que el Gobierno agiliza la tramitación ambiental y se permitía que los proyectos que no están en la Red Natura 2000 (el sistema de protección de la naturaleza de la UE) puedan seguir una vía rápida de evaluación. "Se reduce la participación ciudadana y esto genera más rechazo y descontento en el territorio", opina Ruiz, de SEO/BirdLife. Transición Ecológica, sin embargo, rechaza esa idea. "No se ha aligerado ni un milímetro la exigencia de garantías ambientales en todos los procesos de evaluación", afirmaba hace unos días Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista con este periódico.

La vía de los tribunales

La judicial es una importante baza con la que cuenta el movimiento más contrario a las grandes instalaciones renovables. "Ante la ausencia de diálogo, vendrá la vía judicial", avisa Báguena. "Estamos recibiendo llamadas de empresarios dispuestos a pagar los pleitos", añade respecto a la situación en Aragón, una de las zonas de más conflicto donde Teruel Existe ya ha presentado varias denuncias contra la tramitación realizada por el Gobierno regional. "Es dinero de gente oriunda de Teruel y Zaragoza que ha hecho fortuna y que ahora no quiere esos proyectos", añade Báguena. "Es un tema emocional".

Al margen de este frente, a las promotoras les preocupan los plazos. José María González, de la Asociación de Empresas de Energía Renovables, lo explica así: "Va a ser difícil encontrar *epccistas* [empresas de diseño y construcción de proyectos], conseguir transformadores de tensión... Todo, suponiendo que el resto de equipos estén disponibles. Va a ser algo completamente nuevo, que va a poner a España a la cabeza de la demanda mundial de estos componentes, China y Estados Unidos al margen".

Donoso, de UNEF, aboga por su parte por "una extensión del plazo límite de dos años". Ahora, dice, "hay más cuellos de botella de mano de obra en autoconsumo que en suelo, pero empieza a haber problemas en suelo".

Juan Virgilio Márquez, de la Asociación Empresarial Eólica, apunta a los componentes: "Va a generar tensiones. Con todas las fábricas españolas solo para el mercado nacional, saldrían unos 4.000 MW. Pero no todo va para el mercado nacional". La cadena de suministro, dice, debe dotarse de más capacidad en tiempo récord: dos años. "No va a ser fácil".